



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022)**

**REFERENCIA:** INCIDENTE DE DESACATO - CONSULTA  
**ACCIONANTE:** GILBERTO ANTONIO BEDOYA PATIÑO  
**ACCIONADO:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN  
INTEGRAL DE VÍCTIMAS – UARIV  
**RADICADO:** 05001 – 31 – 05 – 023 – 2021 – 00241 - 01  
**ACTA N°** 089

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procede a decidir de plano mediante el presente proveído el grado jurisdiccional de consulta surgido con ocasión de la decisión adoptada en el incidente de desacato incoado por el señor **GILBERTO ANTONIO BEDOYA PATIÑO** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS - UARIV**.

El expediente llegó al Tribunal Superior de Medellín, por remisión que hizo el Juzgado del conocimiento para que se surtiera el trámite de la Consulta. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 089** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

**1. ANTECEDENTES FÁCTICOS**

El señor GILDARDO ANTONIO BEDOYA PATIÑO interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por considerar que se le estaban vulnerando múltiples derechos fundamentales. El trámite tutelar concluyó con sentencia de segunda instancia en la

cual se REVOCÓ la de primera, y se CONCEDIÓ el amparo, en consecuencia, de ello se ordenó a la accionada<sup>1</sup>:

**“PRIMERO: REVOCAR** la decisión adoptada por la **Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín el 2 de julio de 2021**, para en su lugar, **TUTELAR** los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, dignidad humana y al reconocimiento de la reparación administrativa como víctima del conflicto armado interno del señor **GILDARDO ANTONIO BEDOYA PATIÑO**

**SEGUNDO: ORDENAR** a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV – efectuar el **reconocimiento y pago de la reparación administrativa** a la que tiene derecho el señor **GILDARDO ANTONIO BEDOYA PATIÑO, dentro de la vigencia del año 2021**, de conformidad con el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia”.

El accionante, impetró el incidente de desacato que ahora es objeto de análisis judicial el 26 de octubre de 2022, indicando que la accionada no ha cumplido con la orden de tutela<sup>2</sup>. El Juez de instancia, inició el trámite incidental agotando el respectivo procedimiento<sup>3</sup>, encontrándose que la UARIV en su respuesta afirma que frente a la priorización de la indemnización administrativa por hecho victimizante de “Lesiones Personales Físicas reconocido bajo el marco normativo de la Ley 1448 de 2011 FUD AK000119604 en la que hace referencia a una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad” el accionante no ha remitido el certificado de discapacidad sobre la Resolución 113 o la Historia Clínica que indique el tipo de discapacidad para continuar con el proceso; señalando lo siguiente:

“...que la solicitud hecha por el señor **GILDARDO ANTONIO BEDOYA PATIÑO** relacionada con la priorización de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de **Lesiones Personales Físicas reconocido bajo el marco normativo de la Ley 1448 de 2011 FUD AK000119604** en la que hace referencia a una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.

Sin embargo, al realizar la validación de la información que adjunta a la solicitud esta debe acreditarse mediante certificado médico que cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para **enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo** el certificado médico deberá contener:

- ✓ Lugar y fecha de expedición de la certificación.
- ✓ Datos completos de la persona (víctima).
- ✓ Firma y registro médico o tarjeta profesional del médico tratante.

<sup>1</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia” – “C01Tutela023202100241” Archivo PDF rotulado “17SentenciasSegundaInstancia\_p80-p100”

<sup>2</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia” – “C02Incidente023202100241” Archivo PDF denominado “002EscritoIncidenteDesacato\_p2-p8”

<sup>3</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia” – “C02Incidente023202100241” Archivo PDF rotulado “012AutoImponeSancion\_p57-p61”

**RADICADO 05001 – 31 – 05 – 023 – 2021 – 00241 - 01**

- ✓ Diagnóstico clínico según la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud.
- ✓ Papelería identificada con el nombre y/o logo institucional de la entidad prestadora de servicios de salud a la cual se encuentra afiliada la víctima.

**Para discapacidad:**

- Conforme con la Circular 009 de 2017 de la Superintendencia de Salud, el certificado debe ser firmado por el médico tratante y debe tener fecha de expedición anterior al 1 de julio de 2020; este soporte será válido hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Conforme a la Resolución 0113 de 2020 del Ministerio de salud, el certificado de discapacidad debe ser expedido por la institución prestadora de servicios de salud autorizada por el ente territorial, evaluado por un equipo multidisciplinario de mínimo 3 profesionales; este soporte será válido a partir del 1 de julio de 2020 en adelante.

Cualquiera de las anteriores certificaciones, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Circular 009 de 2017 (Emitida por la Superintendencia de Salud)	Resolución 113 de 2020 (Emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Papelería identificada con el nombre y/o logo institucional de la entidad prestadora de servicios de salud a la cual se encuentra afiliada la persona con discapacidad.</li><li>2. Nombre y documento de identificación de la persona con discapacidad.</li><li>3. Diagnóstico clínico determinado de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades y temas relacionados con la salud CIE 10 décima edición.</li><li>4. Categoría o categorías de discapacidad relacionadas con el diagnóstico del caso.</li><li>5. Firma del profesional, cédula o registro médico.</li><li>6. Fecha de expedición de la certificación.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Datos personales del solicitante.</li><li>2. Lugar y fecha de expedición de la certificación.</li><li>3. Categoría de la discapacidad.</li><li>4. Nivel de dificultad del desempeño, donde se asigna un porcentaje para cada dominio.</li><li>5. Perfil de funcionamiento.</li><li>6. Firma de los profesionales del equipo multidisciplinario.</li><li>7. Firma del solicitante o representante legal.</li><li>8. Código QR.</li></ol>

En caso de no contar con los certificados relacionados anteriormente, es válido como soporte de discapacidad la Epicrisis o el resumen de historia clínica expedida por la EPS, que dé cuenta expresa de los datos personales de la víctima, el diagnóstico o los diagnósticos médicos, la discapacidad y su categoría".

Es así como el Juez de instancia al no encontrar que se hubiese cumplido en su totalidad con la orden de tutela decidió abrir el incidente de desacato<sup>4</sup> y sancionar a la doctora **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora Técnica

<sup>4</sup> Carpeta denominada "01PrimeraInstancia" – "C02Incidente023202100241" Archivo PDF rotulado "003AutoRequierePrevioDesacato\_p6-p6"

de Reparación de Antioquia Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico de la misma Entidad, con tres (03) días de arresto y cinco (05) SMLMV<sup>5</sup>, argumentando básicamente lo siguiente:

“...es claro que ni la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDEZ**, como Directora de Reparaciones de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ni la Dra. **MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico, aportaron las explicaciones que justifiquen el incumplimiento pregonado, pues la entidad se limita a evadir el cumplimiento de la sentencia constitucional solicitando al petente documentos adicionales y sujetando el pago a la disponibilidad presupuestal, cuando en este fallo se expresó con claridad la orden a cumplir, quedando en un absoluto limbo los derechos fundamentales del señor **GILDARO ANTONIO BEDOYA PATIÑO**(...)”

Luego de imponerse y notificarse la **sanción** la entidad remitió escritos en el que reitera: **i)** Que ara el trámite pertinente respecto a la indemnización administrativa para el señor Gildardo Antonio Bedoya Patiño es pertinente se allegue el **certificado de discapacidad sobre la Resolución 113 o la historia clínica que indique el tipo de discapacidad, que le generaron las lesiones.** **ii)** Que la Unidad ha tratado de establecer contactos telefónicos con los celulares 300 753 00 64 – 314 635 80 66 y al fijo 604 477 6614 **sin lograr** informar los soportes que debe allegar para dar continuidad al proceso de indemnización administrativa. **iii)** Anuncia que espera que los Juzgados colaboran con la actualización de datos de contacto y así poder informar al accionante la documentación faltante.

En efecto, el Despacho de la Magistrada Ponente intentó a través del correo electrónico dado en la tutela como en el incidente [saraybrian1@hotmail.com](mailto:saraybrian1@hotmail.com) sin obtener respuesta alguna, logrando comunicación con la hermana del actor, señora CONSUELO BEDOYA al número 604 477 68 14, quien manifestó que el hermano había perdido el celular y que no viven cerca, pero que a través de otra familiar le harían llegar la información de que en la Unidad de Víctimas se necesitaba la Historia Clínica o el certificado de la discapacidad que padece para dar cumplimiento efectivo a su solicitud<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia” – “C02Incidente023202100241” Archivo PDF rotulado “012AutoImponeSancion\_p57-p61”

<sup>6</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia” Archivo PDF rotulado “020RespuestaRequerimientoUARIV\_p100-p118, **págs. 7 a 19**”

Pues bien, sea lo primero señalar que en la sentencia emitida por esta corporación el **10 de agosto de 2021**<sup>7</sup> se ordenó que dentro de la vigencia del año 2021 la entidad efectuara el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa a que tiene derecho el señor GILDARDO ANTONIO BEDOYA PATIÑO; decisión que se adoptó ante la actuación negligente e irregular de la entidad, atendiendo a las particularidades del caso concreto, toda vez que ante la reconocimiento de indemnización administrativa ante la entidad desde el **25 de enero de 2013** el señor BEDOYA PATIÑO había demostrado tal condición con el **Certificado de Discapacidad expedido por Metrosalud**, reiterado tal certificación de la E.S.E. METROSALUD actualizada del **21 de enero de 2021** con la que acredita la situación de discapacidad de tipo físico que padece el actor y el hecho de contar con **62 años** de edad, por haber nacido el **30 de enero de 1960**.

Los planteamientos que presenta la accionada referidos a un trámite administrativo interno que adelanta para cumplir la orden constitucional notificada desde hace más de **un (01) año**, en manera alguna sirven de argumento para justificar la tardanza en el reconocimiento de la reparación de la víctima de este proceso. Por el contrario, lo que se advierte es que el incumplimiento subsiste y que la decisión adoptada en la providencia que ahora se revisa se encuentra ajustada a derecho, por lo siguiente:

Es claro que el incidente de desacato es un mecanismo de coerción con el que cuentan los jueces en desarrollo de sus poderes disciplinarios, por ello está amparado por los principios del derecho sancionador, otorgándosele garantías al disciplinado. De esta manera, en el desarrollo del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, siendo claro que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, porque es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia **C-367 de 2014**, indicó que las autoridades judiciales que deciden un incidente de desacato, deben verificar una serie de requisitos, así:

“(…)” **4.3.4.8.** El trámite de cumplimiento sigue el procedimiento previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga amplios poderes al juez de tutela para hacer cumplir la sentencia, valga decir, para garantizar el

---

<sup>7</sup> Carpeta denominada “01PrimeraInstancia” – “C01Tutela023202100241” Archivo PDF rotulado “17SentenciasSegundaInstancia\_p80-p100”

cumplimiento material y objetivo de la orden de protección de los derechos amparados. Hay tres etapas posibles en el procedimiento para cumplir con el fallo de tutela: (i) una vez dictado, el fallo debe cumplirse sin demora por la persona a la que le corresponda; (ii) si esta persona no lo cumpliera dentro de las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior de esta persona para que haga cumplir el fallo y abra un proceso disciplinario contra ella; (iii) si no se cumpliera el fallo dentro de las 48 horas siguientes, el juez “ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiera procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo”.

**4.3.4.9.** De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo” (...). ”.

Verificado entonces el respeto del procedimiento previo en este trámite conforme lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los precedentes constitucionales sobre la materia, se concluye que la omisión que se endilga al sancionado es el incumplimiento de la orden de tutela del **10 de diciembre de 2021<sup>8</sup>** y de acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, es un hecho cierto, que la orden impartida no ha sido satisfecha porque es claro que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas –UARIV– no efectuó el reconocimiento y pago de la reparación administrativa dentro de la vigencia del año 2021, ni lo ha hecho para la fecha en que se emite esta providencia.

Y es en este contexto, respetando los lineamientos del debido proceso, llevan a la Sala a **CONFIRMAR** la decisión que se revisa, en relación con la imposición de la sanción a las Doctoras **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de Directora Técnica de Reparación de Antioquia Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de superior jerárquico de la misma Entidad, con tres (03) días de arresto y cinco (05) SMLMV, porque se ha respetado a cabalidad el debido proceso y la misma se encuentra dentro de los rangos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

---

<sup>8</sup> Carpeta denominada “01PrimeraInstancia” – “C01Tutela023202100241” Archivo PDF rotulado “17SentenciasSegundaInstancia\_p80-p100”

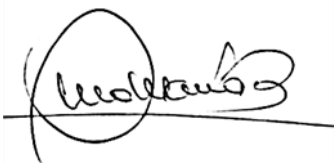
## 2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **RESUELVE:** **CONFIRMAR** la sanción impuesta a la Dra. **CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES** en su calidad de DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y a la Dra. **MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ** en su carácter de DIRECTORA DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, con tres (03) días de arresto y cinco (05) SMLMV por incumplir la orden impartida mediante sentencia del **10 de agosto de 2021**.

Notifíquese lo decidido a las partes y a la señora Procuradora Regional.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 216 del 30 de noviembre de 2022.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>